



Aguas de Albacete

**«CUESTIONARIO PARA ACTORES NO ESTATALES –
INFORME PARA EL 48º PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS (2021) SOBRE LA PLANIFICACIÓN Y VISIÓN
INFORME PARA EL 76º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2021) SOBRE LA
MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA»**

COVID-19 Y LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 y de las estrategias de protección y recuperación en los países en los que trabaja su organización ¿qué medidas se han puesto en marcha, por los gobiernos y operadores, públicos o privados, para asegurar que toda la población tenga un acceso adecuado y suficiente a los servicios de agua, saneamiento e higiene?

Medidas adoptadas por los gobiernos:

El Gobierno de la nación decretó el estado de alarma, de forma que pucio centralizar las decisiones y medidas de organización. El primer estado de alarma se decretó mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y se prorrogó hasta el 21 de junio de 2020. En fecha 25 de octubre de 2020 mediante Real Decreto 926/2020, se decreta de nuevo el estado de alarma, que posteriormente fue prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021.

Entre las medidas implementadas, se incluyeron medidas de protección para los «servicios esenciales». En esta línea, las empresas de servicios esenciales debían adoptar las medidas para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.

De igual modo se declaró el carácter «esencial» de determinados servicios relacionados con el ciclo integral del agua. Dichas medidas se plasmaron en la Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.

Medidas adoptadas por los operadores (públicos o privados):

Ya incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud elevase la situación de emergencia de salud pública a pandemia internacional en fecha 11 de marzo de 2020, se vino implementando medidas de prevención y protección de la salud de sus trabajadores, por encima de los que, en febrero y principios de marzo, eran los estándares legales. Así, desde la Sociedad, y en concreto desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, junto con otros departamentos como RRHH, jurídico, comunicación, operaciones, clientes, compras, ... se adoptaron medidas de información y protección por razón del Covid-19, entre otras:

Por parte de la Organización Mundial de la Salud la situación de emergencia de salud pública fue elevada a pandemia internacional en fecha 11 de marzo de 2020.

Incluso con anterioridad AGUAS DE ALBACETE, vino implementando medidas de prevención y protección de la salud de sus trabajadores, muy por encima de lo que, en estas fechas iniciales, febrero y principios de marzo de 2020, eran los estándares legales. Así, desde la Sociedad, y en concreto desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, junto con otros departamentos como RRHH, jurídico, comunicación, operaciones, clientes, compras, se



Aguas de Albacete

adoptaron una serie de medidas de información y protección por razón del Covid-19, entre otras:

- **Comunicaciones a los trabajadores:** se informó de las medidas restrictivas atinentes a la política de viajes, y a la asistencia a cursos, seminarios, congresos, y con carácter general, cualquier tipo de eventos que supusiera concentraciones de personas. La frecuencia de los comunicados a los trabajadores se fue incrementando de forma paulatina, coincidiendo con el agravamiento de la situación. Las medidas preventivas fueron cada vez más restrictivas.
- Implementación de medidas de protección e higiene de los trabajadores: De forma generalizada, se facilitó el acceso al gel hidroalcohólico, restringiéndose el régimen de reuniones internas y de visitas del personal externo a las oficinas del grupo, que quedaron prohibidas durante la primera semana de marzo. Se dio, asimismo a los proveedores información específica para que se aseguraran de que su personal no accediese a los centros en condiciones o circunstancias que pudiesen derivar en un potencial riesgo de contagio de Covid-19.
- Medidas de protección en los ámbitos de Operación y Mantenimiento: en ese ámbito, se mantuvieron siempre en los niveles habituales, ya de por sí muy rigurosos y estrictos.
- Además, en los ámbitos concretos de Operaciones y Clientes, se desarrollaron planes de contingencia específicos con el foco dirigido a aumentar el nivel de exigencia, a medida que iba agravándose la situación.
- Teletrabajo: Se impuso el teletrabajo de forma generalizada para toda la plantilla, se establecieron turnos quincenales, alternos y obligatorios, a fin de reducir la plantilla presencial a menos de la mitad, y asegurar de este modo el distanciamiento social adecuado (a pesar de que entonces no era obligatorio).

Con todas estas actuaciones previas AGUAS DE ALBACETE, siempre con la voluntad de preservar la salud y seguridad de sus trabajadores, y a la vez, garantizar y mantener el servicio de todas sus empresas, fue capaz de adelantarse a la situación de la crisis sanitaria que vendría después.

En fecha 14 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto número 463/2020, de 14 de marzo, *por el que se declara el estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19*, al que le sucedieron numerosos Reales Decretos, Decretos Leyes y Órdenes ministeriales, que prorrogaron el estado de Alarma cada 15 días adoptándose distintas medidas de prevención para los distintos sectores de actividad afectados.

Ajustándose en todo momento a la regulación del estado de alarma se implementaron medidas de salvaguarda, protección y contención, en los distintos ámbitos y sectores que lo integran, que se describen a continuación:



Aguas de Albacete

- La anticipación como clave de la respuesta: el SPM tal y como se ha indicado anteriormente, adoptó medidas previas a la declaración por la OMS de la pandemia internacional y a la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno.
- Participación en la Decisión: el SPM ha estado siempre presente en todos los comités de gestión de la crisis puestos en marcha por razón del Covid-19.
- Máxima protección: todas las decisiones y medidas adoptadas se han orientado y se han basado en el objetivo de perseguir y conseguir la máxima protección de la salud de los trabajadores y su entorno y de asegurar la continuidad del propio servicio.
- Aprovisionamiento de material: colaboración con el área de Compras y Aprovisionamiento para la compra de material de protección/prevención homologado: mascarillas, desinfectante, mamparas de protección, termómetros.
- Teletrabajo como medida de protección: se ha impuesto el teletrabajo a todo el personal cuyo trabajo no implique necesariamente presencia física.
- Confinamiento de equipos en instalaciones críticas: se ha garantizado la salud de los trabajadores mediante su confinamiento en las instalaciones, ETAP, y con ello se ha garantizado la continuidad del servicio a la población.
- Asimismo, se ha facilitado el acceso a asistencia psicológica para personal confinado, así como para cualquier otro trabajador de la compañía.
- Desescalada, se ha realizado con la máxima cautela y prudencia:

La adopción de las medidas expuestas ha permitido garantizar la continuidad del servicio durante todo el periodo de emergencia provocado por la pandemia.

En cuanto a la adopción de medidas de protección para colectivos vulnerables, AGUAS DE ALBACETE ya había adoptado una serie de medidas para la protección a los vulnerables antes de que comenzara la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus, y que fueron expuestas en el cuestionario del anterior relator especial, Leo Heller, y que se puede consultar [aquí](#), a pesar de que no se haya recogido en el informe final.

Esta protección a los colectivos vulnerables viene desplegándose aunque no exista una normativa estatal que, con carácter general, imponga medidas de protección a los colectivos vulnerables en el ámbito del agua.

En el caso de que los servicios de agua y saneamiento sean gestionados por operadores privados y estos no puedan cumplir las exigencias derivadas de la COVID 19 ¿qué medidas específicas se han llevado a cabo para asegurar que la población cuenta con un acceso adecuado a los servicios e instalaciones de agua, saneamiento e higiene?

No consta que haya habido problemas con operadores privados que no hayan sido capaces de cumplir las exigencias como consecuencia de la COVID 19.



Aguas de Albacete

1.1 En el caso de que los servicios de agua y saneamiento sean gestionados por operadores privados y estos no puedan cumplir las exigencias derivadas de la COVID 19 ¿qué medidas específicas se han llevado a cabo para asegurar que la población cuenta con un acceso adecuado a los servicios e instalaciones de agua, saneamiento e higiene?

Aguas de Albacete ha adaptado todos sus procedimientos para cumplir las exigencias como consecuencia de la COVID 19.

Importante y destacable ha sido el reconocimiento en medios de comunicación, y a nivel de ciudadanía realizado por Aguas de Albacete, para garantizar el servicio en todo momento con los mismos estándares de excelente calidad. Como ejemplo:

<https://albacetecapital.com/aguas-de-albacete-anticipacion-y-recuperacion-tras-la-crisis-sanitaria/>

<https://www.latribunadealbacete.es/noticia/z4d0978fe-a444-5de7-060011443a57bae8/confinamiento-para-garantizar-el-abastecimiento-de-agua>

1.2 En el caso de los servicios de agua y saneamiento sean administrados por gobiernos locales y municipales (regionales) o bajo gestión comunitaria, y se planteen dificultades para cumplir las exigencias derivadas de la COVID 19 ¿qué medidas específicas se ha llevado a cabo desde el gobierno central para asegurar que la población cuente con un acceso adecuado a los servicios e instalaciones de agua, saneamiento e higiene?

Tampoco se tiene conocimiento de que haya habido operadores públicos que no hayan podido hacer frente a los retos planteados por la COVID 19.

En los países donde su organización trabaja, ¿qué medidas temporales, de carácter político o legislativo, han sido implementadas en el contexto de la COVID-19 (incluyendo el estado de emergencia, leyes de emergencia o moratorias) para prohibir cortes de agua para aquellos que no son capaces de pagar las tarifas establecidas por estar en situación de pobreza y vulnerabilidad?

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En concreto, su artículo 4 impone medidas tendentes a garantizar el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Su artículo 29, se refiere a la garantía de suministro de agua con carácter general

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. En su Disposición adicional cuarta, de nuevo se recoge la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables durante la duración del estado de alarma.



Aguas de Albacete

¿Qué medidas se han tomado, ya sea por operadores públicos o privados, para asegurar la asequibilidad de los servicios de agua para aquellos que no pueden costear el precio de las facturas por razones más allá de su control, incluyendo el desempleo y la pobreza, los cuáles han incrementado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19?

Se ampliaron plazos para el pago de los recibos de agua, así como se articularon mecanismos para retrasar el envío de las remesas bancarias para facilitar el pago.

Además, Aguas de Albacete firmó con Cruz Roja convenios en Castilla-La Mancha para facilitar el acceso al agua a todas las personas que no pudiesen acceder a tarifas sociales.

Con el fin de apoyar la difícil situación vivida por todos, se decidió congelar el importe del recibo del agua un año más, estando sin incrementos desde el año 2014.

Se amplió el importe de la tarifa social implantado en Albacete, pasando de un importe de 172 m€ a 200 m€. Este importe se ha ampliado como medida preventiva, y con el fin de apoyar a aquellos colectivos más desfavorecidos.

https://cadenaser.com/emisora/2020/10/01/radio_albacete/1601552953_289528.html

<https://www.aguasdealbacete.com/-/el-consejo-de-administracion-de-aguas-de-albacete-acuerda-congelar-nuevamente-el-recibo-de-agua-para-2021-e-incrementar-la-tarifa-social>

En el contexto de la pandemia, ¿se respetó la seguridad y la libertad de los defensores de los derechos humanos al agua y al saneamiento durante protestas contra las desconexiones de servicios y movimientos en defensa del acceso y la calidad del agua?

No se tiene constancia de ningún tipo manifestaciones por cortes de agua ni protestas en este sentido.

¿Cuáles son las vulnerabilidades exacerbadas por la COVID 19 que afectan negativamente al acceso de las personas al agua, el saneamiento de la higiene (WASH)? ¿Qué medidas y pasos se han tomado para identificar y aliviar la situación de aquellos individuos y grupos en mayor situación de vulnerabilidad? ¿Puede proporcionar casos, estadísticas o ejemplos específicos? En particular:

¿Cuáles son los retos específicos a los que se enfrentan la población que vive en las zonas rurales y la población que dependen de servicios comunitarios de agua y saneamiento?
¿Cómo se han abordado estos retos?

En este ámbito territorial no existen «servicios comunitarios de agua y saneamiento». Este tipo de organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS) son una fórmula de gestión colectiva del agua característica en algunas zonas de Latinoamérica pero que, salvo error por nuestra parte, no está presente en España.

¿Cuáles son los retos específicos a los que se enfrenta la población que vive en zonas con estrés hídrico y/o regiones semiáridas?

Si bien es cierto que a comienzos de siglo, sí hubo problemas de suministro en algunas regiones, como consecuencia de las sequías prolongadas, actualmente, considerando a la «población» como el conjunto de ciudadanos o usuarios normales, no existe ningún reto específico, más allá de la necesidad de adoptar una cultura de consumo responsable.

Estos retos específicos atañen más a los propios operadores, y que se refieren a la escasez del recurso a la que deben enfrentarse mediante distintos métodos, tales como el uso de agua regenerada, búsqueda de fuentes alternativas o la desalación.



Aguas de Albacete

Es destacable la existencia de retos concretos en determinados sectores, como el agrícola (que debe adaptarse a las circunstancias actuales y al cambio climático), o el sector industrial (que debido a la escasez del recurso se ven limitados para acometer determinadas actividades)

Por último, merece destacarse que el hecho de que la población no sufra directamente las consecuencias del estrés hídrico no significa que las Administraciones deban permanecer impasibles sino todo lo contrario, ya que los principales retos en las zonas de estrés hídrico son responsabilidad de las autoridades públicas. Es por tanto necesario que tanto a nivel estatal como autonómico se adopten medidas decididas frente a los retos que plantea el cambio climático.

¿Cuáles son los retos específicos a los que se enfrenta la población que vive en campos de refugiados, en las comunidades de acogida que absorben a refugiados y solicitantes de asilo o desplazados forzosos, en los barrios marginales y en los asentamientos informales de las zonas urbanas y periurbanas? ¿Los trabajadores temporeros?

Las medidas para enfrentarse a este tipo de retos se abordan, a través de la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.

España ha comenzado y la tarea de transposición esta directiva (aunque dispone de plazo hasta el 13 de enero de 2023).

En España, existen estudios sobre la vivienda y población gitana (2015) realizados por la Administración General del Estado, en los que se proponen medidas para afrontar entre otros el problema del acceso al agua. Existe también una respuesta del Estado español remitida al anterior relator especial en relación con el Informe sobre realización progresiva del derecho humano al agua y saneamiento ([aquí](#))

Además de los grupos mencionados que han sido identificados como brechas en la investigación del Relator Especial hasta el momento, ¿a qué otros grupos y población se debe dar prioridad debido al aumento de la vulnerabilidad que ha creado la COVID19?

La legislación española está evolucionando hacia un concepto más amplio del término «vulnerabilidad».

En este sentido, Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situación de vulnerabilidad social y económica, aborda la cuestión de la «vulnerabilidad» desde una perspectiva global, no exclusivamente económica.

No obstante lo anterior, sí es cierto que en el ámbito del agua, el concepto de «vulnerabilidad» está principalmente vinculado a condiciones económicas, de forma que el principal motivo por el que determinadas personas tienen dificultades de acceso al agua obedece a cuestiones económicas.

Como excepción a lo anteriormente señalado, es reseñable que en el caso de los colectivos de asentamientos irregulares y de personas sin hogar, además del problema económico en ocasiones confluyen otro tipo de factores (culturales, identitarios, etc.).

En este último caso es esperable que los trabajos de transposición de la Directiva (UE) 2020/2184 aborden también este tipo de cuestiones.



Aguas de Albacete Políticas públicas

1. En los países donde su organización trabaja, ¿qué medidas se han tomado a través de políticas públicas, y otras leyes centradas en aumentar la resiliencia y sostenibilidad ("Building Back/Forward Better") para hacer frente al incremento de las vulnerabilidades que afectan a individuos y grupos por la pandemia?

La Ley de Cambio Climático, que incorporará compromisos para lograr la plena descarbonización de la economía y para fortalecer la resiliencia frente a los impactos climáticos.

El gobierno regional de Castilla La Mancha ha presentado al gobierno de España, varios proyectos, entre los que destaca los liderados por Aguas de Albacete, valorados en más de 20 Mill €, que pretenden transformar e impulsar entre otros aspectos más de 200 puestos de trabajo.

¿Qué conclusiones pueden extraerse de la respuesta a la COVID-19 en relación al aumento de la protección social y la resiliencia de cara a potenciales crisis futuras de salud pública?

Es necesario disponer de mecanismos de sostenibilidad e invertir en la transformación de las infraestructuras para garantizar la resiliencia del servicio.

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el agua, el saneamiento y la higiene como parte del fortalecimiento de la política de salud pública? ¿Qué impacto (si lo hay) tuvieron las medidas de protección frente a la COVID-19 en cuestiones relacionadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento, como proyectos relacionados con la higiene menstrual?

Hasta el momento, no consta que haya sido necesario abordar ningún proyecto de este tipo.

En su opinión, y haciendo referencia tanto medidas a corto como a largo plazo ("Building Back/Forward Better") ¿qué áreas no han sido abordadas o requieren mayor atención?

En primer lugar, resulta de vital importancia resolver los problemas de saneamiento. El pasado 18 de marzo de 2021, el Director General del agua, Teodoro Estrela, declaró que España continúa teniendo 5 expedientes abiertos por incumplimiento de la Directiva de tratamiento de aguas residuales de 1991. En sus declaraciones, recordó asimismo que España ya ha sido multada y viene pagando 20 millones al año ([aquí](#)). Lo alarmante de esta situación es que además seguirá pagando esa multa mientras no se resuelvan las situaciones de incumplimiento de Alhaurín el Grande (EDAR todavía en fase de construcción), Barbate (EDAR que todavía no ha sido licitada), Matalascañas (EDAR no licitada), y Valle del Güímar (EDAR inacabada).

En este punto, resulta interesante mencionar que con fecha 23 de marzo de 2020 el Gobierno ha aprobado la primera partida de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuya gestión corresponderá fundamentalmente a las Comunidades Autónomas: *"Tendrán que activar la selección, la convocatoria, la ejecución de proyectos de inversión y la distribución de recursos"*. Se trata de 581 millones de euros los cuales 100 se destinarán a saneamiento y depuración de aglomeraciones urbanas de



Aguas de Albacete

menos de cinco mil habitantes que hayan quedado rezagadas en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto, y que tienen difícil sufragar estas inversiones a través de las tasas municipales ([aquí](#)).

En su opinión, ¿los gobiernos nacionales/regionales/locales han respondido de forma adecuada la crisis desencadenada por pandemia a través de las políticas de protección?

CUESTIONARIO CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO

Impactos en grupos específicos

En su experiencia, ¿Cómo los impactos del cambio climático dificultan el cumplimiento de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, especialmente en los grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Puede identificar grupos específicos que hayan aumentado su vulnerabilidad en materia de abastecimiento y saneamiento debido al cambio climático (sequías, inundaciones, desertificación)? (por ejemplo, mujeres, personas en asentamientos, refugiados, indígenas, etc) ¿puede proporcionar algunos estudios de caso, estadísticas o ejemplos específicos?

El cambio climático en España ha afectado por igual a personas vulnerables como no vulnerables.

Las lluvias torrenciales, los fenómenos atmosféricos de la gota fría (también conocidos como DANA), las sequías prolongadas no hacen distinciones, afectan por igual a toda la población.

Ciertamente las ciudades o pueblos situados en zonas inundables son los más expuestos en casos de lluvias torrenciales. Por su parte, aquellos situados en zonas de menor precipitación, tienen escasez de recursos hídricos.

¿Qué pasos y medidas están considerando para incluir en sus proyectos a los grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Puede proporcionar estudios de caso, estadísticas o ejemplos específicos?

Nos remitimos a las distintas medidas ya citadas

¿Qué iniciativas y proyectos a nivel regional/local se han puesto en marcha para tener en cuenta la voz y los conocimientos de los grupos en situación de vulnerabilidad a la hora de diseñar soluciones frente al cambio climático (sequías, inundaciones, desertificación) sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento? ¿Qué mecanismos de participación se están activando? ¿Puede aportar estudios de caso, estadísticas o ejemplos concretos?

En España esta pregunta puede que no tenga mucho sentido. Como se ha dicho más arriba, la vulnerabilidad aquí es una cuestión principalmente económica, no fruto de otras circunstancias.

En Aguas de Albacete llevamos años implementando medidas destinadas a la mitigación del cambio climático mediante proyectos basados en generación propia, compra de energía verde, eficiencia energética y movilidad sostenible.



Aguas de Albacete

El impacto de las sequías en disponibilidad y calidad

Durante los ciclos de sequía, cuando los efectos del cambio climático tienden a intensificarse en frecuencia y duración, las reservas de agua deberían estar monitorizadas y previstas, y se debería priorizar el uso doméstico, para beber y uso personal, garantizando el derecho humano al agua, especialmente a los grupos que sufren situaciones de vulnerabilidad. Del mismo modo, se debería prever el impacto negativo sobre la calidad de aguas, por concentración de contaminantes a reducirse los caudales de dilución. En este contexto, para que las estrategias de adaptación al cambio climático garanticen el acceso de la población al suministro seguro de agua potable y saneamiento:

Según su experiencia, ¿considera que a nivel nacional/regional y local existe una estrategia de prevención de la sequía con una planificación hidrográfica que garantice el suministro de agua de calidad, especialmente a los colectivos en situación de vulnerabilidad? ¿qué debilidades considera que existen en las estrategias de prevención de la sequía? ¿puede aportar algunos estudios de caso, estadísticas o ejemplos concretos?

La sequía y por tanto las actuaciones a desarrollar en estas situaciones deben estar basadas en la planificación, mediante una “gestión del riesgo”, y no en medidas de emergencia como “respuesta a la crisis”.

- La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, sentó las bases, en su artículo 27, de esta gestión planificada de las sequías. Se centra en aspectos como la definición de un sistema de indicadores de sequías, que ayude a la toma de decisiones de forma objetiva, progresiva y planificada; la elaboración de Planes Especiales de Sequías en cada ámbito de planificación hidrológica; y la elaboración de Planes de Emergencia para sistemas de abastecimiento de más de 20.000 personas.
- Los Planes Especiales de Sequía en los ámbitos intercomunitarios fueron aprobados definitivamente mediante la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, aunque la filosofía establecida en los mismos ya llevaba años aplicándose.
- Estos Planes Especiales han sido de una gran utilidad para evitar, o al menos mitigar de forma importante, los efectos socioeconómicos negativos de las sequías, incluso en secuencias meteorológicas muy similares a la producida en el periodo 1991-1995.
- Durante 2017 y 2018 se ha llevado a cabo la revisión de los Planes Especiales de Sequía, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, de aprobación de los Planes Hidrológicos de segundo ciclo, de forma que fueran coherentes con los criterios de estos planes (en cuanto a su definición y establecimiento de recursos, caudales ecológicos, condicionantes del cambio climático, demandas, etc.) y que diferencien claramente las situaciones de sequía y escasez. Los nuevos planes de gestión de sequías fueron definitivamente aprobados mediante la Orden TEC/1399/2018 de 28 de noviembre publicada en el BOE del 26 de diciembre de 2018.
- En Aguas de Albacete hemos realizado los planes emergencia por sequia de las poblaciones superiores a 20.000 habitantes entre las que destaca los de Zamora, Palencia, Ciudad Real, Segovia, Ponferrada

Sería conveniente la realización de los planes de emergencia por sequia para todas las poblaciones y no solo para las superiores a los 20.000 habitantes, combinado estos planes con otros planes de renovación de la red de abastecimiento que mejore los rendimientos de la misma, planes de la reutilización de agua para determinados



Aguas de Albacete

usos y minimizar las entradas de agua al sistema, etc., que serán planes anuales independientes de los de sequía.

Desde su experiencia, ¿considera que las medidas previstas en los planes de emergencia por sequía son suficientes y adecuadas para garantizar la prioridad del suministro de agua en los hogares y para usos personales y domésticos, especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad? Si no es así, ¿puede describir los retos actuales para que estas medidas sean efectivas?

En España las medidas que se adoptan en este ámbito afectan a toda la población, no están específicamente dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.

¿Ha identificado zonas, barrios o poblaciones en situación de vulnerabilidad que estén expuestas a la escasez de agua en periodos de sequía? Si es así, según su experiencia, ¿considera que los gobiernos – central, regional y/o local - están aplicando políticas públicas que garanticen la disponibilidad de agua de calidad en estos casos? ¿Puede dar ejemplos concretos?

En España las medidas que se adoptan en este ámbito afectan a toda la población, no están específicamente dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad

El impacto de las inundaciones en la disponibilidad y calidad del agua

Las inundaciones causadas por lluvias torrenciales y crecidas de ríos, aparte de provocar riesgos para las vidas de las personas afectadas, inundaciones de viviendas, destrucción de cultivos y diversos daños económicos, tienen impactos significativos en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. A menudo, el suministro de agua doméstica queda contaminado, o las instalaciones de suministro quedan afectadas, lo que conlleva cortes en el suministro de agua potable. Las estaciones de saneamiento tienden a bloquearse cuando reciben los drenajes de esas lluvias torrenciales junto con el agua de los retornos domésticos e industriales, lo que provoca vertidos directos sin depurar. Es especialmente preocupante el riesgo de que las estaciones de saneamiento, situadas cerca de los ríos, se inunden indefinidamente. En ocasiones, un aumento en el nivel de los ríos y el drenaje masivo de aguas pluviales generan inundaciones de aguas negras urbanas desde el alcantarillado, que incluso llegan al interior de las viviendas. En este contexto, para que las estrategias de adaptación al cambio climático garanticen que la población tiene acceso a agua potable y saneamiento seguros:

Según su experiencia, ¿cuáles son los puntos de mejora que es necesario incluir en los planes de ordenación territorial y urbana ante los riesgos de inundación para minimizar la vulnerabilidad de las poblaciones y garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento?

En el reglamento del Dominio Público Hidráulico se tienen en cuenta en las autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento de zonas urbanas los siguientes criterios en relación a desbordamientos en episodios de lluvia:



Aguas de Albacete

- a) Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán justificar la conveniencia de establecer redes de saneamiento separativas o unitarias para aguas residuales y de escorrentía, así como plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores.
 - b) En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados.
 - c) En tiempo seco no se admitirán vertidos por los aliviaderos.
 - d) Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora deberán dotarse de los elementos pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del área drenada para limitar la contaminación producida por sólidos gruesos y flotantes. Estos elementos no deben producir una reducción significativa de la capacidad hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de fallo.
 - e) Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de lluvia, los titulares de vertidos de aguas residuales urbanas tendrán la obligación de poner en servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas las primeras aguas de escorrentía de la red de saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes producidas en dichos episodios.
- En el reglamento del Dominio Público Hidráulico se tienen en cuenta en las autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento de aguas residuales de zonas industriales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en relación a los desbordamientos en episodios de lluvia:
 - a) Los proyectos de nuevos desarrollos industriales deberán establecer, preferentemente, redes de saneamiento separativas, e incorporar un tratamiento de las aguas de escorrentía, independiente del tratamiento de aguas residuales.
 - b) En las redes de colectores de aguas residuales de zonas industriales no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la implantación de la actividad industrial o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados.
 - c) No se permitirán aliviaderos en las líneas de recogida y depuración de:
 - 1.º Aguas con sustancias peligrosas.
 - 2.º Aguas de proceso industrial.
- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en aras del cumplimiento de los objetivos medioambientales del medio receptor, establecerá normas técnicas en las que se especifiquen y desarrollen los procedimientos de diseño de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de escorrentía. Dichas normas se utilizarán en el establecimiento de las condiciones de las autorizaciones de vertido.

La Administración General del Estado están pendientes de aprobarse unas normas técnicas descritas en el RD1290/2012, en las que deben quedar explicitados claramente los objetivos medioambientales que se persiguen, los procedimientos de diseño de las



Aguas de Albacete

obras y actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales definidos, y por tanto indicando a los organismos de cuenca y a las entidades que soliciten autorizaciones de vertidos, los criterios a seguir para aprobar o rechazar una petición de vertido cuando hay DSS en episodios de lluvia. Estas normas ayudarán a

A completar en España la función de los sistemas de saneamiento descrita en la Directiva 91/271 permitiendo resolver la problemática de los desbordamientos en tiempo de lluvia y así mejorar el estado de las masas de agua.

- La gestión de los desbordamientos de sistemas de saneamiento (DSS) se concibe de un modo integrado, mediante el análisis global de los sistemas urbanos que pueden generar impactos a un mismo medio receptor. •

Se avanza, así mismo, en el cumplimiento de las directrices de la DMA sobre el control de la contaminación difusa movilizadora en las escorrentías pluviales contaminadas.

- El desarrollo de SUDS se considera una medida clave para reducir los impactos por DSS.

- Los estudios o planes que promueven estas Normas en los sistemas de saneamiento y drenaje podrán ser de ayuda para el desarrollo del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficacia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR)

Permitirán orientar programas de medidas en la planificación hidrológica para minimizar los impactos generados por la contaminación asociada a las aguas pluviales.

¿Qué medidas deberían tomarse para evitar el bloqueo de las estaciones de saneamiento, las inundaciones por desbordamientos fluviales o las inundaciones negras desde la red de alcantarillado?

Evitar filtraciones de aguas naturales en las redes de saneamiento, construir zonas inundables reversibles

Según su experiencia, ¿considera que los planes de emergencia para los barrios y grupos en situación de mayor vulnerabilidad ante inundaciones son adecuados y eficaces para garantizar los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene a esas poblaciones, tanto en sus viviendas como en las posibles circunstancias de evacuación, si esta fuera precisa? Si no es así, ¿qué mejoras considera necesarias?

Las mismas medidas que en el apartado anterior.



Aguas de Albacete

El impacto de la desertificación en la disponibilidad y calidad del agua

El incremento de las temperaturas y de la variabilidad pluviométrica provocado por el cambio climático aceleran y agravan la desertificación en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Dicha desertificación incrementa las escorrentías y por tanto el riesgo de inundaciones (con sus consecuencias en el suministro de agua y el saneamiento); al tiempo que acarrea una menor infiltración en los acuíferos, lo que afecta a la disponibilidad de agua. Por último, el riesgo de incendios es cada vez mayor, lo que aumenta el riesgo de erosión y desertificación de las zonas quemadas.

Según su conocimiento, ¿qué pasos y medidas se están dando para garantizar el suministro continuo de agua y saneamiento en caso de desertificación, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad?

En España las medidas que se adoptan en este ámbito afectan a toda la población, no están específicamente dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.

¿Hay políticas de información y de participación ciudadana que integren los derechos humanos en la lucha contra la desertización?

Aguas de Albacete ha llevado a cabo varios proyectos en los que además de mitigar los efectos del cambio climático se contribuye a la lucha contra la desertización.

CUESTIONARIO ACERCA DE LA FINANCIARIZACIÓN/MERCANTILIZACIÓN

Especificidades del sector WASH y de la financiarización:

Los servicios de agua y saneamiento son un monopolio natural y requieren grandes inversiones a largo plazo, lo que contrasta con las características clave de los mercados financieros: competencia y gestión a corto plazo. Esto, entre otras cosas, hace que el sector WASH, en principio, sea diferente a otros servicios básicos.

A partir de su experiencia, ¿cómo actúan los grandes operadores privados frente a las necesidades de inversión a largo plazo en el sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH)? ¿Conoce operaciones financieras significativas de corto plazo en el sector WASH hasta hoy? ¿Cree que pueden combinarse operaciones especulativas de corto plazo con estrategias de largo plazo en el sector WASH? Por favor, comparta posibles investigaciones, testimonios o experiencias.

La legislación española dispone que los servicios de agua y saneamiento son competencia exclusiva de las entidades locales. En este sentido, en estas actividades no hay propiamente un «mercado», las actividades no están privatizadas y por tanto no puede hablarse de «competencia en el mercado».

En aquellas ocasiones en las que la Administración decide abrir el mercado, y buscar la colaboración de un operador privado para la prestación del servicio, se abre un procedimiento de licitación lo que implica abrir un período de competencia «por el



Aguas de Albacete

mercado». Abrir el mercado a los operadores privados y elegir al operador privado depende siempre de la voluntad de la Administración local.

Es por ello que las consideraciones sobre la mercantilización del sector no tienen sentido en España., de forma que la presencia de operadores privados en este sector tiene lugar *siempre* en el contexto de un contrato de servicios que se presta a la Administración competente.

En España los operadores privados hacen frente a las necesidades de inversión a largo plazo del sector del agua mediante contratos por los que prestan servicio y asistencia a Entidades Locales.

Estas Entidades Locales conservan siempre la titularidad del servicio y son las que en última instancia deciden lo relativo a las características de esta inversión, la identificación de las actuaciones concretas, el volumen de la misma, etc.

Todo lo anterior, lleva a concluir que en España no existe un mercado del agua propiamente dicho. Se trata de una actividad atribuida monopolísticamente a las Administraciones Públicas.

En la medida que se trata de un monopolio natural y que no puede haber propiamente competencia en el mercado, ¿qué papel debería tener la participación y el control ciudadano en la gestión de estos servicios? ¿Puede compartir algún ejemplo relacionado con buenas prácticas de control y participación ciudadana, en coherencia con lo que exige en este sentido la gestión de derechos humanos?

En el ordenamiento jurídico español se contemplan diversos mecanismos de participación pública para instrumentar la colaboración ciudadana en la gestión de servicios públicos. En este sentido, existe, por ejemplo, un trámite de información pública en los procesos de internalización de servicios públicos. En la medida en que la internalización o gestión directa de un servicio público de suministro de agua supone el cierre del mercado, impidiendo que los operadores privados especializados puedan concurrir ofreciendo sus servicios a la ciudadanía, la Administración debe demostrar que si gestiona el servicio directamente por sus propios medios lo hará de manera más eficiente para la ciudadanía que de acudir a un proceso de competencia competitiva para su gestión por una empresa especializada. Ese análisis comparativo debe someterse a la opinión de la ciudadanía (información pública) para que participen y expresen si están de acuerdo en la decisión de que el servicio se gestionará monopolísticamente por el Ayuntamiento sin haber dado opciones a recibir ofertas por parte de empresas especializadas que pudieran ser más beneficiosas para ellos.

Del mismo modo, en los procedimientos de aprobación de las tarifas y de las revisiones tarifarias, se abren trámites de información pública que permiten a cualquier ciudadano no únicamente manifestarse a favor o en contra, sino presentar propuestas alternativas a las del Ayuntamiento.

Aguas de Albacete, sin ser obligación legal, posee un portal de transparencia, donde informa y pretende ser una ventana más de transparencia a la ciudadanía.



Aguas de Albacete

Sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento

El anterior Relator Especial, Leo Heller, dedicó un informe temático al impacto de la privatización sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento (A/75/208) en 2020. Basándose en las recomendaciones realizadas en este informe, el actual Relator Especial se propone examinar el papel de los actores privados que participan en el abastecimiento de los servicios de agua, saneamiento e higiene, así como clarificar los riesgos que puedan emerger para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y el saneamiento. En este contexto:

AGUAS DE ALBACETE participó en la elaboración de ese informe tal al que se puede acceder a través de la página web de NNUU ([aquí](#)), si bien el informe no recogió ninguno de los comentarios ni explicaciones que se facilitaron para su elaboración, básicamente porque los casos comentados en el informe no se corresponden con la actividad de suministro en España, y contemplan una realidad radicalmente distinta, en la que el Estado no tiene una regulación del sector. Las recomendaciones contenidas en dicho informe van dirigidas fundamentalmente al Estado que carece de esa regulación para que se dote de los mecanismos regulatorios adecuados.

Por ello, AGUAS DE ALBACETE se reitera lo manifestado en la anterior respuesta. En España no es correcto hablar de «privatización» del sector del agua. La actividad no está liberalizada a diferencia de lo que sucede sin con el suministro de gas, electricidad, y servicios telefonía, por ejemplo. La privatización, en rigor, implicaría el paso al sector privado de algo que hasta ese momento había sido de titularidad pública, y esto nunca ha sucedido en España.

El hecho de que el sector privado pueda colaborar en distintas etapas del ciclo integral del agua urbana no implica un abandono por parte del sector público.

El sector privado opera como un «asistente», se hace cargo de una parte material del servicio, pero no asume ni la titularidad del servicio, ni su control, de forma que la Administración Pública sigue siendo la responsable de gestionar el servicio, de adoptar las decisiones sobre el mismo, de fijar los precios, de determinar sus prioridades, etc.

Es por ello, que no hay estrictamente una privatización del agua. Lo que hay es una colaboración del sector privado en la prestación de un servicio público.

¿Se ha encontrado con políticas y alianzas basadas en Asociaciones Público-Público (PUPs), entre instituciones públicas, que hayan tratado de reforzar estos servicios? Si así es, por favor, dé ejemplos concretos de PUPs u otras formas de gestión y financiación públicas exitosas y explique lo que funcionó y lo que no.

No conocemos ninguna asociación público- público, que haya sido éxito o ejemplo de gestión y financiación.



Aguas de Albacete

Las crisis pueden favorecer inversiones privadas para llenar los vacíos de financiación en infraestructuras y servicios públicos, si se aplican estrategias de “austeridad”, como ocurrió en la anterior crisis (2007 – 2008). Teniendo en cuenta la crisis económica desencadenada por la pandemia de la COVID-19, así como la necesidad de inversión en infraestructuras para prevenir los efectos del cambio climático:

¿Se han aplicado, o se prevén, fondos verdes o subvenciones para el cambio climático y para la adaptación al medio ambiente al sector del agua, el saneamiento y la higiene (WASH)? De ser así ¿Ha animado esto a los actores privados a entrar en el sector WASH? Si es así, ¿de qué manera?

Actualmente, las principales medidas de apoyo al cambio climático en este momento son las que se espera recibir de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Los fondos europeos, en principio, deberían estar destinados a reforzar recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueve la transición ecológica y los procesos de digitalización.

En el caso del agua, el sector ha presentado a las Administraciones Públicas españolas varios proyectos susceptibles de financiación dirigidos a la adopción de medidas para hacer frente al cambio climático y la adaptación al medio ambiente del sector del agua, saneamiento y la higiene.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado la inminente puesta en marcha de una serie de ayudas dirigidas al sector del agua, concretamente a los municipios de reducida dimensión.

Asimismo, por parte de este mismo Ministerio se ha anunciado que parte de los fondos que se reciban de la Unión Europea irán destinados a subsanar las deficiencias que nuestro país sufre en materia de depuración.

¿Ha habido una reacción en la financiación pública de estos servicios (WASH) ante el reto que supone la pandemia de la COVID-19? ¿Ha habido incremento de la financiación privada ante la COVID19? ¿Cuál ha sido el impacto en las comunidades en situación de vulnerabilidad de esos aportes de financiación pública o privada?

Tanto la Administración General del Estado como la de las Comunidades Autónomas han puesto en marcha distintos proyectos que, en principio, deberían ser objeto de financiación con cargo a los futuros fondos europeos y que inciden en el desarrollo ecológico y en la digitalización del sector del agua. No obstante, son proyectos que aún están pendientes de concreción y desarrollo.



Aguas de Albacete

Sobre los mecanismos basados en el mercado como respuesta a la escasez de agua

Existen varias opciones basadas en el mercado para gestionar la escasez de agua y su distribución entre los usuarios involucrados. Aunque hay diferentes modelos, lo que es común a todos es la necesidad de separar los derechos al agua de los derechos a la tierra, de forma que el agua como tal, o los derechos al agua, se pasan a administrar como un bien de consumo. Existen modelos, como el de los Bancos de Agua (Water Banks), que organizan transacciones bajo el control público y con fuertes regulaciones. También existen opciones de mercado de derechos entre los beneficiarios directos de los derechos al agua y los usuarios del agua. Pero estos mercados de agua también pueden estar abiertos a los especuladores, es decir, aquellos actores que no van a hacer uso de los derechos de agua en cuestión, sino que simplemente promueven juegos especulativos (con altas expectativas de beneficios a corto plazo), actuando como intermediarios entre quienes tienen derecho de agua y aquellos que finalmente pueden comprar esos derechos. Aunque los mercados de agua están localizados en el marco de una cuenca hidrográfica o en cuencas interconectadas por trasvases, con la entrada de nuevos actores financieros, los derechos del agua pueden integrarse dentro de los mercados financieros globales, a través de los derivados financieros, donde el agua recibirá el tratamiento de una mercancía más.

De acuerdo a sus observaciones:

¿Cómo están diseñados los mercados de agua que conoce y cuál es su propósito? Por ejemplo, ¿gestionar la escasez de agua, la sobreexplotación o los impactos del cambio climático, facilitando transacciones entre quienes tienen derechos al agua y quienes aspiran a tenerlos? ¿El agua que se almacena o se transfiere es propiedad pública o privada? Y en caso de que sea privada, ¿qué se privatiza en realidad? Por ejemplo, ¿una cantidad determinada de agua, la licencia para extraer cierta cantidad de agua o la concesión?

El ordenamiento jurídico español, no prevé con carácter general este tipo de negocios con el agua, es decir, no se permiten. El agua es un bien público que queda fuera del comercio.

Como se ha señalado anteriormente la legislación española considera el agua como un bien de dominio público que no está sujeto al comercio. El acceso al agua en sus recursos de origen se obtiene a través de autorizaciones administrativas.

Los operadores, públicos, privados o mixtos solo se dedican a la prestación de servicios relacionados con el abastecimiento, saneamiento y depuración. Los operadores no son dueños del agua que gestionan, porque es un bien de dominio público.

El derecho español, la cesión de los usos para abastecimiento de población solo puede realizarse para ese mismo uso en favor de otro Ayuntamiento, y siempre que lo autorice la Administración hidráulica.

En España el agua no tiene precio libre, tiene un precio controlado por las Administraciones públicas.

Por lo expuesto, no tendría sentido un mercado de futuros sobre el agua en España.



Aguas de Albacete

Los mercados de agua afectan a las comunidades en situación de vulnerabilidad de diferentes maneras, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas puede que sus derechos no se tengan en cuenta. Los pequeños agricultores por otro lado pueden quedar fuera del mercado debido al aumento de los precios. ¿Cuál ha sido el impacto de los mecanismos basados en el mercado sobre las comunidades en situación de vulnerabilidad para acceder y costear los servicios de agua y saneamiento?

En algunos mercados de agua, sólo participan actores que compran el agua para su propio uso (por ejemplo, agricultura, minería, servicios urbanos del agua), pero hay mercados abiertos a especuladores. ¿Cuáles son los mayores actores en los mercados de agua que conocen? Y, si los mercados están abiertos a los inversores financieros, ¿qué tipo de empresas son? Por ejemplo, fondos de cobertura, inversores individuales, bancos nacionales o internacionales ... ¿Influye el tipo de actores sobre el diseño y comportamiento del mercado del agua, así como sobre el precio y accesibilidad del agua?

No se tiene conocimiento de esta circunstancia.

El índice Nasdaq Veles California Water es el primer ejemplo de mercado de futuros del agua, ¿cuál cree que será su impacto en la asequibilidad y disponibilidad del agua? ¿Cree que este modelo se extenderá más allá de California? Si es así, ¿de qué manera?

Se desconoce si este tipo de mercados de futuros tendrá éxito en otros ámbitos más allá del caso de California. Sin embargo, lo que sí está claro es que, a día de hoy, en España jurídicamente no es posible constituir un mercado de futuros como el que acaba de crearse en Estados Unidos.

¿Dispone de investigaciones, pruebas o experiencias prácticas sobre el impacto de los mecanismos de mercado en las comunidades en situación de vulnerabilidad?

No. Como se ha manifestado en España no se puede hablar de que exista un «mercado del agua».

La realidad existente en España consiste en una serie de servicios en cuya gestión, si las Administraciones Públicas lo consideran adecuado, pueden colaborar los operadores privados. Pero esto, ni esto implica una transferencia de la titularidad del servicio ni, mucho menos, una transferencia de la propiedad del agua.

En cuanto a la protección de las comunidades en situación de vulnerabilidad, esta es una preocupación tanto de las autoridades públicas como de los operadores, públicos y privados, y es por ello que se han establecido sistemas para la protección de estas comunidades, como los descritos más arriba.



Aguas de Albacete

Sobre la mercantilización del agua por medio del agua embotellada.

La extracción del agua para bebidas es una industria creciente y altamente rentable. Las empresas de extracción de agua pueden disfrutar de licencias para obtener agua de acuíferos o de aguas superficiales, o bien pueden acceder a aguas municipales a costes bajos o marginales. Las bebidas comercializadas, incluyendo el agua embotellada, pueden dirigirse a familias con acceso limitado o de baja calidad a servicios públicos del agua, así como a quienes recelan sobre la calidad de los servicios públicos de agua. Cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad, los altos precios pueden ser difíciles de cubrir. Cuando las aguas subterráneas o superficiales escasean estos negocios pueden aumentar la vulnerabilidad de comunidades enfrentadas a problemas de escasez.

A partir de sus experiencias:

¿Cuál ha sido el impacto de extracciones de agua embotellada sobre el acceso de las comunidades en situación de vulnerabilidad a los servicios de agua y saneamiento? Por favor, comparta cualquier evidencia que tenga al respecto, incluyendo informes de investigación, experiencias prácticas o testimonios.

En España no existe un problema de disponibilidad del agua de grifo por presencia de agua embotellada. Son dos sectores que coexisten.

Adicionalmente, en la Directiva (UE) 2020/2184, relativa a la calidad del agua de consumo, se establecen una serie de medidas tendentes a fomentar el uso del agua del grifo tanto en edificios públicos como en exteriores, restauración etc.

Es previsible que, una vez que esta Directiva haya sido transpuesta al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, los distintos ordenamientos jurídicos europeos establecerán medidas de fomento del consumo de agua del grifo.

¿Existen mecanismos para que las comunidades afectadas pidan cuentas a las empresas o al Estado por su impacto en el acceso, asequibilidad y disponibilidad del agua?

En España, los responsables últimos del acceso, asequibilidad y disponibilidad del agua son las autoridades públicas competentes. Los operadores privados actúan siempre siguiendo las instrucciones marcadas por las Administraciones Públicas.

Por su parte los ciudadanos, individualmente o de forma asociada, pueden plantear ante las Administraciones públicas las cuestiones que consideren relevantes. Es este el caso de las Agrupaciones de consumidores y usuarios donde el ordenamiento jurídico español establece distintas formas de colaboración y participación ciudadana.

Por otro lado, la ley española habilita expresamente cauces de participación ciudadana durante el proceso de aprobación de las ordenanzas y reglamentos en materia de agua. Por tanto, es posible que las comunidades afectadas puedan participar en la elaboración de esta normativa.

Además, los usuarios también están presentes en los órganos autonómicos responsables de revisar las estructuras tarifarias del agua.

Por último, el Derecho administrativo española habilita cauces para que los ciudadanos puedan reclamar en caso de incumplimiento de las obligaciones legalmente atribuidas.



Aguas de Albacete

Por todo, España dispone de un número significativo de herramientas que permite a los ciudadanos/comunidades participar en la gestión del agua y «pedir cuentas» a las entidades responsables de este tipo de servicios.

Sobre la financiarización

Los servicios e infraestructuras de agua y saneamiento se pueden “financiarizar” de distintas formas, dando más espacio a los actores con ánimo de lucro. Así, inversores, empresas privadas, bancos, entidades financieras (nacionales o internacionales), fondos de cobertura, fondos de pensiones y, cada vez más, aseguradoras, pasan a ganar espacios de negocio en la gestión de servicios e infraestructuras de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) mediante la mercantilización del agua, la privatización de los servicios de agua y saneamiento o el desarrollo y apropiación de infraestructuras en el sector.

La financiarización de WASH ha sido justificada con diferentes motivaciones, por ejemplo, para promover inversiones y ampliar los servicios o para hacer frente a la escasez de agua. Desde las experiencias que conozca, ¿qué actores privados están implicados y qué motivaciones existen?

El término «Financiarización» no aparece recogido por la Real Academia Española. No se sabe exactamente qué significa.

Si por “financiarización” se entiende financiación, la financiación privada de servicios públicos no es un fenómeno nuevo. En este sentido, el modelo concesional vigente en España en el sector del agua desde hace más de un siglo supone entre otras ventajas para la Administración pública, la posibilidad de financiar la construcción o renovación de la infraestructura por parte del concesionario en ausencia de fondos públicos o ante la posibilidad de endeudamiento público.

La financiación que aportan los operadores privados en los servicios concesionados en ningún caso supone ni la privatización de los servicios de agua y saneamiento, ni la apropiación de las infraestructuras del sector que, en tanto que infraestructuras afectas a un servicio público, tienen la consideración de bienes de dominio público.

¿Mercados de derechos de agua, o incluso mercados de futuros?

Como se ha expuesto no aplica al supuesto español porque, como ya se ha dicho más arriba, el ordenamiento jurídico español no permitiría la creación de un mercado de futuros que tuviera como objeto los derechos del agua.

El agua estrictamente no es objeto de derechos (salvo ciertas excepciones), sino que es un bien público gestionado y administrado por las Administraciones públicas.

¿Privatización de servicios o infraestructuras?

Transacciones relativas a la contaminación del agua? Por ejemplo, el comercio de créditos de contaminación en cuerpos de agua compartidos.

Esta es una práctica que no se da en España.

Se desconoce si el ornamento jurídico español habilitaría prácticas de este tipo.



Aguas de Albacete

La mercantilización del agua a través, por ejemplo, del agua embotellada.

La comercialización de agua embotellada en España constituye una alternativa, pero no resulta de consumo obligatorio.

Los ciudadanos pueden optar entre consumir agua embotellada o consumir agua del grifo.

Sin embargo, las autoridades públicas están obligadas a facilitar agua del grifo que los ciudadanos puedan beber.

Desde esa perspectiva, se considera que la existencia de un mercado de agua embotellada en España no constituye un supuesto de mercantilización de este recurso. Es sólo una alternativa más, que no impide un consumo más barato - e igualmente sano - por parte de quienes deseen beber agua del grifo.

¿Cómo ha cambiado esto con el tiempo? ¿hay nuevas tendencias y desarrollos?

Hay un debate en curso sobre el papel y el impacto de la financiarización y la especulación en el agua como recurso, los servicios y las infraestructuras de agua y saneamiento. En su opinión, ¿qué impactos puede tener la participación de los actores financieros promoviendo estrategias especulativas, en los mercados de agua?

Hasta la fecha, la presencia de financiación privada en el sector del agua viene justificada por las posibilidades que ofrece el sector privado de proponer y de implementar alternativas rápidas y eficaces, pero siempre al servicio de la Administración Pública.

En España el agua es un monopolio natural que detenta la Administración Pública. Por tanto, la entrada de un operador privado exige siempre la previa decisión administrativa de contar con la colaboración del sector privado.

El operador privado no entra en el sector para hacerse con el mismo, sino para colaborar con la Administración en la prestación del servicio del que ella es responsable.

Tal y como ya se puso de manifiesto con ocasión del informe anterior, el tipo de contratos que vinculan al sector privado con el público en el ámbito del agua otorgan todas las prerrogativas a este último.

Por tanto, es la Administración Pública y no el sector privado responsable de fijar, no solo el precio del agua, sino también de decidir el volumen de inversión o financiación que espera del sector privado.

Los actores privados han participado en el sector del agua, el saneamiento y la higiene desde hace tiempo, a través de procesos de privatización y mediante estrategias de partenariado público-privado. ¿Qué cambiará a su entender con el avance de la financiarización que supone la entrada de poderosos actores financieros y de las estrategias especulativas en los mercados de futuros?

Bajo el prisma de la regulación actual, no se prevé ningún cambio, toda vez que la financiación privada en el sector del agua no es ninguna novedad, y como se ha dicho, no hay mercado de futuros en España sobre los derechos de agua.

Como ya se ha indicado, la intervención de actores privados en el sector del agua únicamente es consecuencia de la decisión previa del sector público de contar con su colaboración.



Aguas de Albacete

La colaboración público-privada constituye una forma de prestación de servicios que aporta innumerables ventajas y que, por tanto, ha sido apoyado por la Unión Europea y por distintas instituciones internacionales.

En todo caso, pese a la participación del sector privado, la última palabra sobre las concesiones de agua la tiene siempre el sector público.

Por tanto, en ausencia de cambios en la normativa aplicable no se prevén cambios en el sistema.

